



Columna

Pablo Müller-Ferrés,
académico Facultad de Administración y Negocios
Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco



Combustibles caros, empleo frágil: la tormenta perfecta en La Araucanía

El reciente aumento en los precios de los combustibles no puede leerse únicamente como una variable económica más. En regiones como La Araucanía, se convierte en un problema de política pública, porque tensiona simultáneamente el costo de la vida, la cohesión social y la efectividad de las políticas de empleo.

El alza ha sido significativa: más de \$370 por litro en gasolineras y cerca de \$580 en diésel en las últimas semanas, uno de los incrementos más altos en décadas. Este shock no impacta de forma homogénea. En territorios con alta ruralidad y fuerte dependencia del transporte terrestre, el encarecimiento del combustible se traduce rápidamente en mayores costos de alimentos, servicios básicos y movilidad cotidiana.

Es necesario avanzar hacia una coordinación más estrecha entre políticas de empleo y desarrollo productivo.

El punto crítico es que esta presión inflacionaria ocurre en un contexto laboral frágil. La Araucanía registra una tasa de desocupación de 7,8% y niveles de informalidad cercanos al 34,7%, lo que refleja una estructura de ingresos inestable y con baja capacidad de absorción de shocks. En la práctica, esto significa que una parte relevante de los hogares no tiene herramientas para amortiguar el aumento sostenido del costo de vida.

Desde la perspectiva del diseño de políticas públicas, el problema no es solo la inflación, sino su carácter territorialmente desigual. Mientras en zonas más urbanizadas existen alternativas de ajuste –mayor oferta laboral y transporte público más

robusto–, en regiones como La Araucanía los márgenes son más acotados. El resultado es una presión regresiva que amplifica brechas existentes.

Este escenario obliga a repensar la respuesta del Estado más allá de medidas generales. Se requieren instrumentos con mayor foco territorial: mecanismos de compensación para transporte rural, apoyo a pequeños productores afectados por el alza del diésel y políticas de conectividad que reduzcan la dependencia de largas cadenas logísticas.

Asimismo, es necesario avanzar hacia una coordinación más estrecha entre políticas de empleo y desarrollo productivo. No basta con generar puestos de trabajo; se requiere promover empleos menos expuestos a la volatilidad de costos externos, fortaleciendo sectores con mayor valor agregado y arraigo local.

En paralelo, la discusión energética debe incorporar una dimensión regional. Incentivar soluciones de movilidad más eficientes –incluyendo transporte eléctrico en contextos rurales– no es solo una agenda ambiental, sino también una estrategia de estabilidad económica territorial.

Lo que está en juego, en definitiva, no es solo el nivel de precios, sino la capacidad del Estado para responder de manera diferenciada a realidades distintas. La Araucanía enfrenta hoy un shock que evidencia una debilidad estructural: su alta exposición a costos logísticos y su fragilidad laboral.

Convertir este diagnóstico en acción es el verdadero desafío. Porque cuando el costo de vivir sube más rápido que las oportunidades de generar ingresos, lo que se tensiona no es solo la economía, sino la legitimidad misma de la política pública.